

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Yonathan Andrés Castaño Osorio
DEMANDADO	COLPENSIONES
PROCEDENCIA	Juzgado 02 Laboral del Cto. De Bello
RADICADO	05088 3105 002 2023 00255 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 182 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Auxilio funerario – cesión crédito personal y cesión derecho litigioso. Ninguno se cumple
DECISIÓN	Confirma por otras razones

En la fecha, **cuatro (04) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello – Ant., dentro del proceso ordinario de única instancia promovido por **Yonathan Andrés Castaño Osorio** en contra de **Colpensiones**, radicado único nacional 05088 3105 **002 2023 00255** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº.022**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Se pide por la parte actora el reconocimiento y pago del auxilio funerario causado por el fallecimiento del afiliado **Bernabé Adolfo Atehortúa Velásquez**, ocurrido el 17 de diciembre de 2022, indexación de tal valor y costas.

En sustento de ello se afirma que el señor Bernabé estaba afiliado a Colpensiones. Que Edy Sandra Orrego Pulgarín suscribió contrato de servicios exequiales con **Cotrafa Social**, incluyendo como beneficiario al occiso. Que tal entidad certificó la prestación del servicio exequial al señor Bernabé por valor de **\$5.140.200**. Se agrega que la señora **Edy Sandra cedió por escrito sus derechos del contrato funerario y sus correspondientes derechos litigiosos** al hoy demandante, presentando esta reclamación administrativa ante la entidad accionada el **31 de marzo del año en curso**, sin que se emitiera respuesta. Puntualiza que con la documentación aportada acredita los supuestos narrados.

En auto del **10 de mayo, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, fijándose fecha para la audiencia prevista en el artículo 72 del C. P. T. y de la S.S., oportunidad en la que se allegó escrito de contestación por Colpensiones, manifestando frente a los hechos ser ciertos al contar con el correspondiente soporte. **Resistió** las pretensiones al no ostentar el occiso la calidad de afiliado activo para la fecha de su deceso, 17 de diciembre de 2022, y no estar discriminados los gastos fúnebres. Formuló las **excepciones** de inexistencia de la obligación, buena fe de la entidad, prescripción, legalidad de los actos administrativos, y la innominada o genérica.

La primera instancia culminó con **sentencia** proferida por el **Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello** el 23 de junio del año que corre, absolviendo a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra por el demandante, al no haberse realizado la cesión del derecho litigioso en la forma en que correspondía, pues del mismo no se notificó a Colpensiones. Gravó con costas a la parte vencida, fijando el monto de las agencias en derecho.

Al ser la decisión adversa a los intereses de la parte actora, se conoce en grado jurisdiccional de consulta en los términos establecidos por la Corte Constitucional en Sentencia **C-424 de 2015**.

De la etapa de alegaciones hizo uso el apoderado del reclamante, argumentado que la señora Edy Sandra Urrego suscribió contrato de previsión exequial con Cotrafa Social, incluyendo como beneficiario a Bernabé Adolfo Atehortúa Velásquez, quien falleció el 17 de diciembre de 2022, encontrándose afiliado al RPM, asistiéndole derecho al auxilio funerario. El 24 de febrero de 2023 la señora Edy Sandra cedió los derechos funerarios al hoy demandante, transfiriendo la totalidad del auxilio funerario que debe ser reconocido por Colpensiones, reclamándosele a esta entidad por el cesionario el 31 de marzo del año que corre, sin que fuera objetada la documentación agregada. Que al contestar la demanda Colpensiones negó la calidad de cotizante activo del fallecido y el juez de primer grado despachó adversamente la pretensión, argumentando que la cesión no fue válida al no haberse notificado al fondo de pensiones público, desconociéndose la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Civil que descarta tal exigencia, siendo lo trascendente informar de la subrogación, loque se cumplió al efectuar la reclamación administrativa, malinterpretándose por el a quo la legitimación por activa del señor Yonathan bajo la figura de la **cesión de derechos litigiosos**, prerrogativa

a la que se extendió el contrato cedido, *pero no única y exclusivamente a esta figura jurídica, pues incluso se suscribió como contrato exequial para presentar una reclamación administrativa y no una demanda, momento para el cual era imposible predecir que se tendría que llegar ineludiblemente a una demanda judicial para exigir el derecho deprecado.*

También se echó de menos la validez de los contratos de auxilio funerario en entidades como el FONCEP, sin que tal acuerdo se hubiese citado por Colpensiones en el escrito de contestación, desbordándose por el juez las facultades ultra y extra petita, conceptos que ilustra ampliamente, por lo que pide **revocar** en su integridad la providencia revisada.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos que encuentran sustento en el material probatorio se tienen: la afiliación del señor **Bernabé Adolfo Atehortúa Velásquez** al RPM, con cotizaciones interrumpidas a Colpensiones entre el 01 de marzo de 1997 y el 31 de octubre de 2018, para un total de **51,29 semanas**, el deceso del afiliado el 17 de diciembre de 2022; que la señora Edy Sandra Orrego Pulgarín suscribió contrato de prestación de servicios funerarios y/o contrato de previsión exequial con **Cotrafa Social (Mi Plan Contrato – 00130154)**, el 04 de marzo de 2019, en calidad de titular, el que ha estado activo y al día en los pagos desde la fecha de su firma hasta el 18 de agosto del año que corre, conforme a documento allegado con ocasión de prueba de oficio en esta instancia. Que al señor Atehortúa Velásquez se le prestaron los servicios funerarios con cargo al plan de previsión exequial, en calidad de cónyuge y/o compañero permanente, por valor de **\$5.140.200**, con destino final cremación en los hornos de Coosercun –

Servicios Exequiales **el 18 de diciembre de 2022**, aclarando que el certificado de gastos tiene fecha de prestación de servicio el 21 de diciembre del mismo año, dado que al momento de ingresar la información el sistema tomó esta última calenda y no la de los actos fúnebres, adjuntándose relación detallada de cada uno de los ítems atendidos, justificándose así el monto total certificado (archivo 07 respuesta prueba de oficio.PDF).

También se evidencia la reclamación administrativa formulada por el hoy demandante, radicada ante Colpensiones el 31 de marzo del año en curso; **negándose la prestación** mediante acto administrativo No. 2023-4893367, argumentándose, entre otras, que aunque los gastos fúnebres fueron cubiertos por Cotrafa Social, *sin embargo, se puede observar dentro de la discriminación de los servicios presentados no se encuentra el de obtención de licencias de inhumación o cremación, siendo éste indispensable, y por lo tanto no es posible reconocer el auxilio funerario solicitado. Que adicional a lo anterior, analizado el expediente pensional que el afiliado no se encontraba activo en Colpensiones al momento del fallecimiento, pues registra cotizaciones como trabajador independiente hasta el ciclo octubre de 2018.*

Queda entonces circunscrito el **problema jurídico** en esta instancia a establecer la procedencia o no del reconocimiento del auxilio funerario a la parte actora, ello con fundamento en documento rotulado: **cesión de derechos de contrato funerario**, cuyas cláusulas, en lo que interesa rezan:

SEGUNDA. *EL CEDENTE, en calidad de responsable y titular del contrato No. 030214 – MI PLAN 130154, suscrito con **COTRAFA SOCIAL** ... donde ejerce como titular y por el cual se cancelaron los servicios funerarios del señor, **Beravé Adolfo Atehortúa Velásquez** (Q.E.P.D),... cederá el derecho y las obligaciones que de este emanan.*

Por tal motivo cederá, endosará y transferirá al CESIONARIO los derechos contenidos que le corresponden o le puedan corresponder como titular de dicho

contrato, para que el CESIONARIO los ejerza en su propio nombre, por su propia cuenta para su propio beneficio.

SEGUNDO: *EL CESIONARIO acepta la cesión de dicho derecho contenido en el contrato suscrito con todas las responsabilidades y DERECHOS que esto conlleva.*

TERCERA. *Es de mutuo acuerdo establecer que será responsabilidad del CEDENTE continuar pagando mensualmente el PLAN PRE-EXEQUIAL del contrato CEDIDO puesto que de no hacerlo podrá verse afectado el servicio funerario prestado, además acuerdan que el derecho cedido solo se hará con respecto al fallecimiento del beneficiario arriba mencionado (Q.E.P.D).*

CUARTA. *EL CEDENTE autoriza al CESIONARIO para que solicite la certificación funeraria y copia del contrato, además de autorizarlo para solicitar a título propio los derechos derivados del contrato objeto de esta cesión y ejercer ante la entidad correspondiente el ejercicio de estos.*

SEPTIMA. *Cesión de derechos litigiosos. Las partes acuerdan que la presente cesión de derechos se hará extensiva a la cesión de los derechos litigiosos (Art 1953 del Código Civil), y legitima al CESIONARIO, para instaurar las acciones legales ante la jurisdicción correspondiente que en derecho correspondan, según los hechos y derecho resultantes de la negociación del recaudo, en tal virtud podrá designar y contratar abogado(s) a sus expensas, incluso para el trámite de procedibilidad de la acción.*

Pues bien, el auxilio funerario es una ayuda adicional que se reconoce dentro del sistema de seguridad social en pensiones, a la persona que sufrague los gastos de los servicios funerarios de un afiliado o pensionado que haga parte del sistema pensional, sea dentro del régimen de prima media con prestación definida o en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Esta prestación para el RPM está prevista en el artículo 51 de la Ley 100 de 1993, que a la letra dispone:

Auxilio funerario. *La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, tendrá derecho a percibir un auxilio funerario equivalente al último salario base de cotización, o al valor correspondiente a la última mesada pensional recibida, según sea el caso, sin que este auxilio pueda ser inferior a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a diez (10) veces dicho salario.*

Cuando los gastos funerarios por disposición legal o reglamentaria deban estar cubiertos por una póliza de seguros, el Instituto de Seguros Sociales, cajas, fondos o entidades del sector público podrán repetir contra la entidad

aseguradora que lo haya amparado, por las sumas que se paguen por este concepto.

Y para el RAIS en el artículo 86 Ibidem, ambos preceptos reglamentados por el Decreto 1889 de 1994, que en su artículo 18 indica:

AUXILIO FUNERARIO. Para efectos de los artículos 51 y 86 de la Ley 100 de 1993 y en Sistema General de Riesgos Profesionales, se entiende por afiliado y pensionado la persona en favor de quien se hicieron las cotizaciones que originaron el derecho a la pensión.

Para acceder a tal monto económico no se requiere demostrar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, y menos que su causación se haya dado bajo los parámetros de los artículo 46 y 47 de la Ley de 1993, modificados por los preceptos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, así se explica por la Sala de Casación Laboral en sentencia con radicado 42578 del 13 de marzo de 2012.

Para el **caso a estudio**, queda plenamente demostrado que **Cotrafa Social**, le prestó a la señora **Edy Sandra Orrego Pulgarín** el servicio exequial por el señor **Bernabé Adolfo Atehortúa Velásquez**, fallecido el 17 de diciembre de 2022, por un valor total de **\$5.140.200**, siendo el objeto de esta acción el reembolso del valor que corresponde por auxilio funerario del que es titular al ser la **tomadora del plan exequial**; posteriormente, **el 24 de febrero de 2023**, la señora **Orrego Pulgarín CEDIO a Yonathan Andrés Castaño Osorio**, los derechos del contrato funerario, tal como consta en el documento adjunto al escrito de demanda, sin embargo, **del mismo no se puede inferir, ni la transferencia de un crédito personal, y menos de un derecho litigioso**, tema frente al que resulta ilustrativo lo expuesto por la Sección Tercera – Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de junio de 2018, con radicación **13001-23-31-000-2003-01681-01(40353)**, en la que se explica:

De conformidad con los artículos 653¹, 664² y 665³ del Código Civil, los derechos personales o créditos, llamados también por la jurisprudencia y la doctrina "acreencias", "derechos crediticios", "derechos subjetivos" o "derechos de crédito", son aquellos bienes incorporeales o intangibles que consisten en el derecho que la ley, directa o indirectamente, reconoce a una persona para exigir de otra una determinada conducta o prestación, que puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Por su parte, el artículo 670⁴ del mismo código establece que las cosas incorporeales y, en particular, los derechos subjetivos o personales, pueden ser objeto de propiedad y, por ende, de enajenación, como sucede con las cosas o bienes corporales. El mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico para enajenar los derechos personales es la cesión de créditos, figura que se encuentra regulada en el título XXV del libro IV del Código Civil, el cual, a su vez, se subdivide en tres capítulos. El capítulo I hace referencia a los créditos personales; el capítulo II al derecho de herencia y el capítulo III a los derechos litigiosos.

Esta Corporación ha señalado que la cesión de créditos o derechos personales es un acto jurídico mediante el cual una persona transfiere o enajena a otra uno o varios derechos personales o créditos de los que es titular o dueño⁵. En términos similares, la doctrina enseña que la cesión de créditos "es un contrato por el cual el acreedor cedente, gratuita o retributivamente, transfiere a la otra parte, cesionario, el crédito, considerado como un bien incorporal"⁶.

La cesión de créditos puede recaer sobre todo tipo de derechos personales, incluyendo, además de aquellos que tienen por objeto exigir el pago de una suma de dinero, los que facultan al acreedor para exigir del deudor cualquier otra clase de conducta o prestación, como dar otro tipo de bienes, hacer o no hacer algo⁷. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que tanto los derechos personales como las acciones a través de las cuales estos se hacen efectivos, forman parte del patrimonio individual y, por ende, unos y otras son susceptibles de enajenación. Textualmente, expresó:

¹ "ARTÍCULO 653. CONCEPTO DE BIENES. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporeales.

Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro.

Incorporeales las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas".

² "ARTÍCULO 664. LAS COSAS INCORPORALES. Las cosas incorporeales son derechos reales o personales".

³ "ARTÍCULO 665. DERECHO REAL. Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.

Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales".

⁴ "ARTÍCULO 670. DERECHO SOBRE LAS COSAS INCORPORALES. Sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo".

⁵ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de noviembre de 2017, radicación número: 11001-03-06-000-2017-00066-00(2337), M.P. Álvaro Namén Vargas.

⁶ HINESTROSA, Fernando. *Tratado de las obligaciones. Concepto, estructura, vicisitudes*. Universidad Externado de Colombia, 2002, pg. 421.

⁷ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de noviembre de 2017, radicación número: 11001-03-06-000-2017-00066-00(2337), M.P. Álvaro Namén Vargas.

1 - Los derechos personales que, como es obvio, forman parte del patrimonio individual, van investidos para su efectividad de la acción correspondiente. Por eso la acción, como sostienen los expositores, es el derecho en ejercicio. El derecho y la acción como bienes patrimoniales, entran en el comercio en general y sólo por excepción dejan de seguir esta regla. Los únicos derechos, las únicas acciones intrasmisibles que no pueden ser materia de cesión, son aquellas que tienen esa limitación por disposición expresa de la ley, y se sostiene al respecto por varios autores que tal limitación proviene de que esos derechos tienen por base el elemento personal exclusivamente, el factor intuito personae. Como ejemplos de derechos no cesibles, no transmisibles, pueden citarse entre otros, los de uso y habitación, intrasmisibles a los herederos y no cesibles a ningún título (art.878 del C.C.); el de los alimentos (art.424), el que se deriva o nace del pacto de retroventa (art.1942 ibidem), y el mismo de usufructo, cuando su transmisibilidad es el acto testamentario (art. 832 ibidem). No estando prohibido el traspaso de la acción, del derecho que nace de un contrato que adolezca de lesión enorme, debe seguirse entonces la regla general de que se ha hecho mérito, de donde se deduce que esa acción o ese derecho pueden cederse. Si el derecho a pedir la nulidad relativa puede ser cedido (art.1743 ibidem), también puede serlo el derecho para demandar la lesión enorme. 2 - Un derecho se entiende litigioso desde que se notifica judicialmente la demanda (art.4969 del C.C.). Mientras eso no suceda, la acción o derecho transmitido no entra en esa categoría⁸.

...

Lo anterior no significa, sin embargo, que todo tipo de créditos o derechos personales puedan ser objeto de cesión, pues la ley, por consideraciones de orden público, prohíbe la enajenación o la disposición de cierta clase de derechos, como ocurre con los denominados "**derechos personalísimos**" (por ejemplo, el nombre) y con otros que la ley prohíbe expresamente ceder (entre ellos, los derechos morales de autor o los derechos laborales y prestacionales que la Constitución Política y la ley califican como "**irrenunciables**")⁹.

Al hilo de lo anterior, conviene decir que no existe ninguna disposición normativa que prohíba la cesión del derecho personal a iniciar un proceso judicial con el propósito de que se reconozca un derecho material o de darle certeza a una determinada situación jurídica, por lo que mal podría afirmarse que un negocio jurídico celebrado en esos términos adolece de objeto ilícito.

Ahora bien, si es permitido ceder el derecho personal a promover un proceso judicial, es apenas lógico considerar que dicha relación jurídico comercial se concreta antes de haberse instaurado la respectiva demanda. De lo contrario, esto es, si dicho negocio jurídico tiene lugar después de presentada y notificada la demanda, lo que se estaría cediendo es un derecho litigioso.

En efecto, la cesión de derechos litigiosos es una figura sustancial cuya regulación se encuentra prevista en los artículos 1969 a 1972 del Código Civil, disposiciones que la definen como un contrato aleatorio, a través del cual una de las partes de un proceso judicial (cedente) transmite a

⁸ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 26 de septiembre de 1941, M.P. Liborio Escallón. Gaceta Judicial LII. Páginas 402 a 407.

⁹ Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 15 de noviembre de 2017, radicación número: 11001-03-06-000-2017-00066-00(2337), M.P. Álvaro Namén Vargas.

un tercero (cesionario), a título oneroso o gratuito, el derecho incierto sobre el cual recae el interés de las partes del proceso¹⁰. De manera que el derecho adquiere naturaleza litigiosa luego de efectuarse la notificación de la demanda al demandado, pues con dicho acto procesal se entabla la relación jurídico procesal y, por consiguiente, se otorga la calidad de parte demandante y parte demandada, respectivamente, a los sujetos procesales¹¹.

Es claro, entonces, que la cesión de derechos litigiosos implica necesariamente la existencia de un proceso dentro del cual se hubiere surtido la notificación de la respectiva demanda al demandado. En cambio, como se vio, la cesión de derechos personales y, especialmente, el derecho a iniciar un proceso judicial, tiene ocurrencia con antelación al litigio.

Cabe también mencionar la diferencia entre derechos litigiosos y cosas litigiosas, ilustrada por la Sala de Casación Civil en providencia STC4272-2020, radicación 11001-02-03-000-2020-01231-00 del 08 de julio de 2020, así:

"(...) [U]no es el derecho litigioso y otra muy distinta la cosa litigiosa, porque mientras que el primero se entronca con la existencia de un proceso judicial como consecuencia de la resistencia a la pretensión, la segunda constituye el objeto de esa pretensión: inmediato si se mira el derecho, relación o situación jurídica sustancial controvertida, o mediato si se atiende al bien o interés de la vida afectivamente perseguido. En otras palabras, el concepto de derecho litigioso tiene un contenido procesal, por oposición al sustancial de la cosa litigiosa. De ahí que la ley entienda litigioso el derecho desde cuando se da la litis contestatio, porque se traba la relación jurídica procesal por virtud de la notificación judicial de la demanda (artículo 1969 inciso 2º del Código Civil) (...)".

"(...) En este orden de ideas, la cesión del derecho litigioso debe considerarse dentro de la órbita procesal señalada, como el acto por medio del cual una de las partes del proceso cede en favor de otra persona, total o parcialmente, la posición de sujeto de la relación jurídica procesal, y con ella la posibilidad de ejercer las facultades y derechos que de allí se derivan con miras a conseguir una decisión final favorable, que en manera alguna garantiza la cesión (...)".

"(...) [C]uando el objeto de una cesión es el evento incierto de una litis, tiene lugar el acto o contrato que se ha conocido como 'Cesión de derechos litigiosos'.

¹⁰ "Cesión de derecho litigiosos es el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a título oneroso o gratuito, los derechos personales o reales que se controvierten en juicio. Esta cesión se hace efectiva por medio de la entrega del título que contenga la cesión. Este título consiste en un documento privado, aun en el caso en que la controversia trate sobre inmueble". BONIVENTO FERNÁNDEZ, José Alejandro. *Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales*. Ediciones Librería del Profesional, edición No. 13, Tomo I, pgs. 328 y 329.

¹¹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de noviembre de 1954.

Es decir, mediante dicho convenio un litigante cede el derecho que es objeto de discusión en un proceso ya iniciado (...)”¹² (negrilla extexto, subraya original).

Luego, carece el señor **Yonathan Andrés Castaño Osorio** de **legitimación** para hacer valer el **derecho crediticio** al auxilio funerario reclamado a Colpensiones, **toda vez que este es un crédito personal a favor de la señora Edy Sandra Pulgarín, no comprendido dentro de la cesión realizada**, la que por demás **solo está referida plan exequial** que aquella suscribió con Cotrafa Social **a partir del 24 de febrero de 2023, sin que se haga mención alguna a la prestación que es objeto de esta acción, causada con anterioridad a la subrogación.**

Tampoco se puede dar validez a la **cesión del derecho litigioso**, entendido como se dijo en párrafos precedentes, *dentro de la órbita procesal, como el acto por medio del cual una de las partes del proceso cede en favor de otra persona, total o parcialmente, la posición de sujeto de la relación jurídica procesal, y con ella la posibilidad de ejercer las facultades y derechos que de allí se derivan con miras a conseguir una decisión final favorable, que en manera alguna garantiza la cesión*, razones por las que se impone la **confirmación de la decisión revisada.**

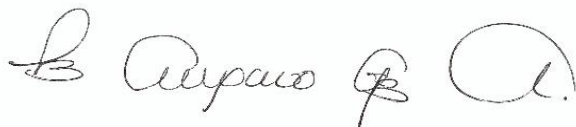
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma**, por otras razones, la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello Ant., Dentro del proceso ordinario de única instancia promovido por **Yonathan Andrés Castaño Osorio** en contra de **Colpensiones.**

¹² CSJ. SC 14 de marzo de 2001, exp. 5647, citada por el tribunal confutado, así como en la sentencia CSJ. STC de 26 de noviembre de 2013, exp. 50001-22-13-000-2013-00451-01.

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO